



PERSPECTIVAS



Edición 174 Agosto 2023

SUPLEMENTO DE
ANÁLISIS POLÍTICO



CETCAM
Centro de Estudios Transdisciplinarios
de Centroamérica



Foto: Cortesía

Nicaragua: el oscurantismo en pleno siglo XXI

Suplemento de análisis político - Edición 174

Uno de los últimos zarpazos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por la Compañía de Jesús desde su fundación en los años 60, en Nicaragua. Pocos días después, también cancelaron la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua y ordenaron la confiscación de todos sus bienes. En el caso de la UCA miles de estudiantes, de los cuales muchos estudiaban con becas, quedaron en un estado de incertidumbre respecto a sus cursos, la culminación de sus carreras y sus títulos; sin contar con los cientos de trabajadores y docentes del alma mater que se verán afectados. En relación con los bienes de la Compañía de Jesús, todavía no se conoce cuáles serán confiscados.

Las dos arbitrariedades han generado una enorme zozobra entre la población, un amplio rechazo internacional porque representan una escalada más en la confrontación y los ataques abiertos en

contra de la iglesia católica, así como a la educación y el control sobre los jóvenes en Nicaragua.

El control de las universidades

Las universidades se convirtieron en blancos de la represión de los Ortega-Murillo inmediatamente después que iniciaron las protestas de 2018 por la participación de los jóvenes estudiantes. Prácticamente todos los recintos universitarios se fueron a las calles y experimentaron las primeras acciones de represión con heridos, hostigamiento y ataques de la policía. Una vez que el régimen desalojó violentamente los recintos universitarios ocupados por los estudiantes mediante la llamada Operación Limpieza y estableció un férreo control de las universidades imponiendo autoridades totalmente subordinadas que anularon completamente la autonomía universitaria, especialmente en los recintos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). En ese



contexto, un buen grupo de universidades privadas permanecieron como espacios independientes, aunque bajo fuerte control y vigilancia del régimen, la UCA fue una de ellas donde los estudiantes se atrevían a realizar actividades de protesta dentro del recinto, hasta que los niveles de represión lo impidieron por completo.

En diciembre de 2021, luego de la escalada de represión y violencia emprendida por la dictadura en el marco de la farsa electoral de ese año, ordenaron el cierre de la Universidad Hispanoamericana (UHISPAN) y desde entonces hasta agosto de 2023, han sido cerradas 27 universidades en distintos lugares del país, un buen número en la capital. Se estima que la cantidad de estudiantes afectados alcanza ya casi los 43 mil estudiantes.

Algunas de las universidades más importantes canceladas y quedaron bajo el control del régimen son la Universidad Politécnica (UPOLI), que fue uno de los recintos más activos y ocupado por los jóvenes en 2018; la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), vinculada con la iglesia católica; la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) la Universidad Paulo Freire (UPF) y la Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC). Casi todas estas universidades operaban bajo un esquema de asociaciones privadas con subvención estatal amparadas por la ley del 6 % del presupuesto nacional que debe ser entregado a las instituciones

de educación superior. Por otra parte, muchas de ellas beneficiaban a poblaciones en diferentes localidades del país que encontraban en esos centros su única oportunidad de acceder a estudios técnicos y profesionales.

En esa escalada de control sobre las instituciones de educación superior, muchos estudiantes perdieron sus registros y otra cantidad importante tuvo que cambiar de carrera y de universidad en varias oportunidades por la mala administración de las autoridades impuestas por la dictadura y porque se cerraron carreras que pertenecían al campo de las ciencias sociales, entre otras. Por otra parte, una buena parte de los docentes y el personal que laboraba en esos centros educativos han sido forzados al exilio.

El cierre de la UCA y sus implicaciones

La UCA fue fundada en 1960 por la Compañía de Jesús como el primer centro privado de educación superior en Nicaragua y aún de Centroamérica. Desde sus inicios fue reconocida por su excelencia académica y como un espacio de pensamiento crítico. La UCA cobijó a varias generaciones de nicaragüenses comprometidos con la construcción de la democracia desde la época de la dictadura somocista, en los años 70, hasta la actualidad. Fue en ese recinto universitario donde se refugiaron cientos de estudiantes el 18 de abril

de 2018 cuando fueron atacados por fuerzas policiales y paramilitares mientras protestaban.

La oferta académica de la universidad incluía más de 20 carreras, maestrías, posgrados e incluso cursos de doctorado. Además, bajo su amparo funcionaban varios centros tecnológicos que contaban con equipos avanzados, de investigación e históricos como el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica y Nicaragua (IHNCA), y centros que brindaban servicios a personas de escasos recursos, como el bufete jurídico. Al momento de su cierre, el alumnado ascendía a más de 5 mil estudiantes.

El régimen de los Ortega-Murillo primero ordenó la cancelación de las cuentas bancarias de la universidad y la inmovilización de sus bienes generando un estado muy fuerte de alarma sobre todo entre los estudiantes; esa medida ya hacía temer otra más drástica y en efecto, un par de días después la dictadura ordenó la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus propiedades. Casi a lo inmediato, las instalaciones fueron rodeadas por patrullas de la policía, se instalaron autoridades universitarias espurias. El recinto fue renombrado como Universidad Casimiro Sotelo, un joven estudiante asesinado por la guardia somocista precisamente por reclamar la autonomía universitaria en los años 70; además, se mandaron a instalar símbolos del partido de gobierno por todas partes y el régimen nombró nuevas autoridades bajo su control.

Después de eso, la dictadura ha tomado una serie de decisiones contradictorias que lesionan el derecho de los estudiantes a la educación y que muestran el desconocimiento de las personas nombradas para hacerse cargo de la universidad. Por ejemplo, con la confiscación aproximadamente 600 estudiantes se matricularon rápidamente en otras universidades privadas, principalmente la Universidad Americana (UAM), donde el ejército tiene acciones; los estudiantes fueron aceptados, pero poco después y ante la salida masiva del alumnado, el régimen ordenó que ninguna universidad los aceptara. Por otra parte, primero anunciaron pomposamente la gratuidad de la universidad y días más tarde cambiaron de parecer e informaron que se cobrarían aranceles según la condición de los estudiantes. Adicionalmente, han emitido varios avisos posponiendo el reinicio de clases provocando altos niveles de incertidumbre entre los estudiantes que no saben lo que sucederá con sus cursos. Los más preocupados son aquellos que estaban a punto de graduarse.

La voracidad y afán de venganza de la dictadura sobre la UCA se ha extendido de tal manera que diferentes recursos como el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, así como las bibliotecas han sido pervertidas de tal manera que un importante acervo histórico y técnico se encuentra en alto riesgo de desaparecer.





Foto: Cortesia

Las reacciones que ha generado este ataque contra la UCA y el derecho a la educación han sido amplias y fuertes, especialmente desde todas las expresiones jesuitas tales como la Curia General de la Compañía de Jesús y la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). Gobiernos como el de Estados Unidos, Chile y Colombia se han pronunciado rechazando la confiscación; además de numerosos académicos, personalidades nicaragüenses y de otros países.

Un escalón más en la confrontación con la iglesia

Un día después de la confiscación de la UCA, un dispositivo de policías se presentó a Villa Carmen, un lugar aledaño a la universidad conocido por ser la residencia de un grupo de sacerdotes jesuitas. Los policías les ordenaron a los sacerdotes que salieran inmediatamente sin llevar nada y prácticamente los lanzaron a la calle sin considerar que varios son personas mayores de edad. Al día siguiente, la dictadura canceló la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús y ordenó la confiscación de sus bienes en Nicaragua.

La orden religiosa tiene más de cien años de presencia en el país y en el siglo XIX fue expulsada por apoyar la rebelión de los indígenas de la localidad de Matagalpa, en el norte del país.

Durante las últimas décadas han jugado un papel destacado en la educación de varias generaciones de nicaragüenses a través de una amplia red de centros educativos. Además, se han caracterizado por promover la creación de centros de investigación, análisis, documentación histórica y tecnológicos.

Los jesuitas también han tenido una destacada participación política en diferentes momentos del pasado reciente. Un grupo de ellos apoyó abiertamente al FSLN y el proyecto político de la revolución sandinista en los años 80; a inicios de los 90 se destacaron por el apoyo a los jóvenes estudiantes que reclamaban la aprobación y entrega del 6 % del presupuesto nacional para las universidades. En el contexto de las protestas que emergieron en 2018, la UCA se convirtió en una especie de refugio para los jóvenes ante los ataques de las fuerzas represivas; por otra parte, el rector de la universidad participó en el diálogo que se instaló en mayo de ese año con la mediación de la Conferencia Episcopal.

La cancelación de la personería jurídica y la confiscación de las propiedades a la Compañía, extendieron el temor entre comunidad educativa vinculada con la orden por el posible cierre de numerosos centros educativos, especialmente aquellos que benefician a población de escasos recursos. Aunque el ataque del régimen no ha escalado, no hay ninguna garantía de que cese.

Anular la capacidad de pensamiento

Los ataques a la UCA y a la Compañía de Jesús se inscriben en un contexto de institucionalización y radicalización del estado policial que el régimen de Daniel Ortega ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense desde 2018, pero además es parte de la confrontación abierta que mantiene con la iglesia católica hasta el más alto nivel; es decir, con el propio Vaticano a tal punto que el Papa Francisco lo calificó como una dictadura. Los ataques a la iglesia católica incluyen el encarcelamiento del obispo Rolando Alvarez, con una condena espuria de 26 años por negarse a abandonar el país; allanamiento de templos, confiscación de radios y bienes de órdenes religiosas, asedio constante a templos; agresiones y expulsión a grupos de religiosas y sacerdotes; así como la prohibición para que la población celebre actividades tradicionales como procesiones y fiestas patronales, entre otras.

Pero la trascendencia de estos ataques es enorme y sus consecuencias no han sido previstas ni por la propia dictadura. Son un ataque directo a libertades civiles fundamentales, entre ellas la libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad religiosa. El acelerado control que los Ortega-Murillo han venido imponiendo sobre las universidades y otros centros educativos apunta a un modelo de adoctrinamiento más que de educación, en el que los estudiantes aprendan la “verdad” incontaminada que Murillo ha pretendido imponer sobre toda la sociedad nicaragüense con sus discursos y narrativas. De lo que se trata entonces, es que toda Nicaragua tenga un pensamiento único.

Hay algo más en el trasfondo de las confiscaciones de universidades y tiene que ver con extender el control a los jóvenes universitarios. Los Ortega-Murillo saben que el descontento ciudadano se ha extendido y profundizado entre toda la población, pero especialmente entre las nuevas generaciones de jóvenes que además de experimentar la represión más cruda y violenta desde 2018 hasta la actualidad, están viendo como sus posibilidades de futuro están truncadas en Nicaragua; sus oportunidades sumamente reducidas tanto en el ámbito laboral como educativo; y con un sistema que los empuja a migrar en busca de mejores condiciones para ellos y sus familias a costa de la separación y la distancia. En la lógica del proyecto político de continuidad dinástica de los Ortega-Murillo, estos grupos de jóvenes se convierten en una amenaza en tanto son, inevitablemente, portadores de cambio. En ese sentido, tienen que mantenerlos bajo vigilancia y control a fin de que no expresen públicamente su descontento, alentando a otros sectores de población.

Convertidas en centros de adoctrinamiento más que de educación superior, el control de las universidades por parte del régimen orteguista tiene implicaciones para el desarrollo del país porque afecta directamente la calidad de la educación superior, que ya se encontraba en condiciones difíciles, de tal manera que los profesionales que se gradúan en los centros de educación superior saldrán a la calle con serias deficiencias y su rendimiento profesional será bajo; por otra parte, reduce la capacidad de investigación y de producción de conocimiento, además que restringe el desarrollo de disciplinas del área de las humanidades y las ciencias sociales. Con eso el futuro del país y de las generaciones venideras se encuentra seriamente comprometido.





Foto: Cortesía

Guatemala: las sombras que pretenden opacar la luz

Suplemento de análisis político - Edición 174

Los resultados de la segunda vuelta electoral en Guatemala abrieron una puerta de esperanza para ese país y el resto de Centroamérica. En esos comicios, Bernardo Arévalo y Karin Herrera resultaron elegidos como presidente y vicepresidenta, respectivamente, a la cabeza del Movimiento Semilla, una agrupación política, relativamente nueva que se distancia significativamente de los partidos tradicionales. El júbilo no se hizo esperar entre los guatemaltecos que se concentraron en diferentes lugares para mostrar su respaldo a los recién elegidos gobernantes.

Sin embargo, el camino hacia la presidencia ha estado lleno de obstáculos para Arévalo y Herrera, sobre todo desde que sorprendieron a las viejas estructuras de poder con los porcentajes de votos alcanzados durante la primera vuelta electoral. Desde entonces han hecho numerosos intentos por sacarlos del camino, desde la impugnación de los resultados de las votaciones, pasando por reiteradas tentativas para cancelar al Movimiento Semilla, impedirles conformar una bancada parlamentaria, hasta planes de asesinato.

Los oscuros intentos para impedir que Arévalo asuma la presidencia en enero próximo son promovidos por estructuras de poder del llamado “Pacto de Corruptos” y la Fiscalía ha sido la institución que más se ha prestado a sus designios, de manera que ha utilizado diversos recursos legales para perseguir al Movimiento Semilla. Esto ha provocado una crisis institucional en la que están involucrados todos los poderes del Estado y el Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, la ciudadanía no ha cesado de manifestarse en distintos lugares del país en respaldo a Arévalo y pidiendo la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general, y Rafael Curruchiche, fiscal especial contra la impunidad; ambos funcionarios son parte de la Lista Engel del gobierno de Estados Unidos que incluye a un grupo de actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica.

El nivel de hostigamiento y amenaza es de tal magnitud que Bernardo Arévalo denunció públicamente que en Guatemala estaba en curso un golpe de estado para impedirle asumir la presidencia. Ante esta situación, la comunidad internacional ha expresado su respaldo a los recién

elegidos, así como numerosas organizaciones guatemaltecas e internacionales. Mientras más se acerque la fecha de investidura, el riesgo se incrementa. Por otra parte, seguramente Arévalo se enfrentará a nuevos desafíos durante su presidencia. De manera que el camino de la democracia en Guatemala es sinuoso y con inclinadas pendientes.

El escenario político no parece halagüeño para el resto de la región centroamericana. En El Salvador,

el presidente Nayib Bukele ha impuesto su candidatura para reelegirse en el cargo a pesar de que la constitución se lo prohíbe; mientras en Honduras, el gobierno de Xiomara Castro ha comenzado a mostrar signos preocupantes de autoritarismo y uso de la fuerza para atemorizar a sus adversarios políticos. Indiscutiblemente, esta es una temporada de espesos y oscuros nubarrones para Centroamérica.

Centroamérica: las sombras que pretenden opacar la luz

Elecciones Guatemala

Ganadores



Movimiento Semilla

- 1 Existen numerosos intentos por sacarlos del camino: impugnación de los resultados de las votaciones, reiteradas tentativas para cancelar al Movimiento Semilla, impedirles conformar una bancada parlamentaria, planes de asesinato.
- 2 Los intentos son promovidos por estructuras de poder del llamado “Pacto de Corruptos” y la Fiscalía (institución que más se ha prestado a estos actos)
- 3 Esto ha provocado una crisis institucional en la que están involucrados todos los poderes del Estado y el Tribunal Supremo Electoral.
- 4 La ciudadanía se ha manifestado en distintos lugares del país en respaldo a Arévalo y pidiendo la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general, y Rafael Curruchiche, fiscal especial contra la impunidad; ambos funcionarios identificados como corruptos por parte de Estados Unidos.
- 5 Bernardo Arévalo denunció que se gestaría un golpe de estado para impedirle asumir la presidencia.

El Salvador



Nayib Bukele ha impuesto su candidatura para reelegirse a pesar de que la constitución se lo prohíbe.

Honduras



Xiomara Castro ha comenzado a mostrar signos preocupantes de autoritarismo y uso de la fuerza para atemorizar a sus adversarios políticos.